

Hacia una agricultura y una sociedad rural posibles

JUAN MANUEL OSPINA RESTREPO¹



Saludo a los palmeros que están construyendo las bases de la nueva agricultura y de la nueva sociedad rural colombiana. Saludo a la gente del Cesar que, como pocos, han vivido en tiempos recientes la acción combinada y demoledora de la crisis agropecuaria y de la violencia ciega que parecerían dejar sin futuro a una región que está llamada a jugar un papel crucial en los tiempos por venir de la Costa Atlántica y de Colombia.

De la difícil situación actual que vivimos en este país y en el desarrollo de nuestras actividades diarias podemos sacar dos enseñanzas:

- Que no es posible dejar a las fuerzas del mercado y de la adversidad como únicas responsables del rediseño de la sociedad y de la economía regionales. Que es necesario avanzar con claridad en la identificación y organización de nuevas posibilidades económicas, como un esfuerzo consciente de los ciudadanos y con el claro apoyo del gobierno.
- Que una sociedad dispuesta a evaluar sus experiencias y a identificar sus fortalezas en el marco de una comunidad de propósitos es invencible, y que

ante la violencia, es necesario que hoy reconozcamos que ella es nuestro principal flagelo, al cual sólo derrotaremos con el compromiso de todos y con la clara decisión gubernamental de hacerlo, para no vernos condenados a convivir aterrorizados con la amenaza, sino a vivir tranquila y solidariamente en un ambiente de paz y de progreso. Llegó pues la hora de mirar el problema en toda su complejidad y de enfrentarlo con la decisión de una sociedad que sabe que se juega su suerte y la de sus hijos.

Vivimos una época de profundos cambios internos y externos que influyen decisivamente sobre el futuro del sector rural, sobre sus posibilidades efectivas de progreso y sobre las características que tendrá en el futuro.

Es claro que la internacionalización de la economía, en lo que al sector agropecuario se refiere, no opera como lo publican los textos de economía. El entorno natural, social, cultural e institucional de la actividad rural es marcadamente diferente entre los países y con respecto al medio urbano, para el cual ha sido pensada la teoría económica imperante. Para el sector y sus

¹ Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Intervención en la XXIV Asamblea General de Fedepalma. Valledupar, Mayo de 1996.

productos, los mercados no tienen ni la transparencia ni la libertad que los textos publican.

Los distintos gobiernos, y en especial los de los países desarrollados, encuentran en la preservación y protección de sus comunidades rurales una razón de alta política. La gran heterogeneidad que el mundo rural presenta en países como el nuestro, hace que la sola acción de los mercados, en vez de atenuar esas diferencias, tienda a acrecentarlas con toda una serie de consecuencias negativas que no es del caso enumerar acá.

Podríamos seguir en el análisis, pero baste decir que una agricultura moderna e integrada a otros sectores de la economía con capacidad de generar en su entorno estructuras sociales amables, requiere de una política sectorial activa, es decir, de una clara participación del Estado en su proceso. Y, adicionalmente, esa política sectorial debe estar armonizada con la política macroeconómica, pues está demostrado que en caso de disparidad, esta última se impone sobre la sectorial.

Eso significa, ni más ni menos, que la política rural no puede ser un simple agregado o apéndice de la política general, sino parte fundamental de la misma. De alguna manera, que la sociedad y la economía incorporen su innegable componente rural, que es, finalmente, el fundamento del que podríamos denominar edificio nacional. No basta que a las propuestas políticas se les dé el toque rural; es necesario que sean pensadas con ese elemento incorporado plenamente, no simplemente añadido. Esa es la diferencia entre tener voluntad política o simplemente hacerle honores a la bandera agraria, como sucede casi siempre.

El menosprecio de lo anterior es un claro signo de que en Colombia aún no valoramos, en toda su magnitud, la importancia estratégica que la sociedad y la actividad rurales juegan en la vida del país -en los ámbitos sociales, políticos, instituciones y aun culturales, y no meramente económicos-. Esta que es una posición que desde la SAC defendió con lucidez y coherencia mi antecesor César de Hart, debe seguir siendo bandera de los agricultores colombianos. Vemos que la actual ministra comparte con nosotros esta tesis de inmensas repercusiones para el futuro del campo y de la sociedad colombianas.

*No hay
agricultura
moderna que no
esté basada en
sólidas
organizaciones
de productores,
gremiales y de
otros tipos.*

No hay agricultura moderna que no esté basada en sólidas organizaciones de productores, gremiales y de otros tipos. El conjunto de procesos que acompañan y complementan la labor productiva en finca -investigación y transferencia, información e inteligencia de mercados, capacitación, procesamientos poscosecha, comercialización, para sólo mencionar los principales, se enfrentan de manera eficiente si los productores se organizan para ello. En ese campo, la acción de Fedepalma es modelo.

Pero esa organización es también clave para garantizar la presencia efectiva de los productores en la vida de las comunidades en donde desarrollan su actividad económica. En este campo, la nueva Constitución abre inesperados espacios de oportunidades y responsabilidades, a los cuales los agricultores apenas si nos estamos asomando de manera tímida. El tema daría para un seminario completo, pero lo planteo para resaltar su indudable importancia en la conformación de esa agricultura y de esa sociedad rurales hacia las cuales aspiramos a avanzar.

Criticar y aún atacar a los gremios puede ser una política efectista, pero no es constructiva ni ceñida a la verdad de los hechos. Nuestra organización gremial es perfectible, estamos de acuerdo; necesita ponerse plenamente a tono con los nuevos tiempos y circunstancias, es también cierto, aunque habría que matizar mucho el punto, pues en medio de la natural diversidad que aporta una realidad heterogénea como la rural colombiana, hay grados distintos de desarrollo de la institucionalidad gremial; es verdad irrefutable en el contexto latinoamericano y en el colombiano, que nuestro gremialismo rural se destaca y ello debe llenarnos de satisfacción.

Estado, productores y comunidades organizadas, con una política sectorial activa que mire no sólo al desarrollo de la producción sino a la construcción de la sociedad rural, exigen de instrumentos de política flexibles y eficaces que incorporen esas realidades fundamentales. Ello invita a una revisión profunda de las entidades estatales que trabajan con y para el campo. Hay aún mucho terreno por recorrer y buenos elementos concretos para trazar el camino en este frente neurálgico del desarrollo rural. Experiencias como las del Sena y Corpoica indican que es posible construir la

institucionalidad que requieren esa nueva agricultura y sociedad rural.

Para la SAC, el campo colombiano debe ser capaz de integrar creativamente la pluralidad de actores que en el actúan. Hablemos ahora de la diversidad que cobija el concepto «productores». Por mucho que se escriba en contra, la realidad agraria colombiana, cuando se compara con la de otros países, y no nos salgamos de América Latina, es una realidad de pequeños productores. Y ahí su fortaleza y su debilidad. Por ello creemos que es necesario pensar el proyecto de modernidad rural como uno que abarca e integra a pequeños, medianos y grandes. Posiciones dicotómicas -que resaltan las diferencias sobre las coincidencias- y que estimulan más la confrontación que la concertación, serían contraproducentes para el logro del avance sectorial, desanimarían la inversión, desestimularían el esfuerzo y condenarían a amplios sectores de población campesina a la marginalidad económica, con todo lo que ello implica, y a su creciente dependencia del favor estatal, con lo cual nunca crecerán como ciudadanos, que es a lo que finalmente debe aspirar toda política pública.

Para la SAC, el campo colombiano debe ser capaz de integrar creativamente la pluralidad de actores que en el actúan.

Esto implica trabajar en esquemas que permitan integrar gradualmente a los diferentes productores alrededor de la solución de problemas y el desarrollo de alternativas que les sean comunes. En este campo, los gremios de productores, en el ámbito de las condiciones que caracterizan a sus renglones productivos, tienen una gran tarea por hacer. Fedepalma muestra posibles caminos en ese sentido.

Este punto no se puede concluir sin una alusión al acceso a la tierra. No creemos en el redistribucionismo igualitario que ataca a la propiedad exclusivamente por su tamaño, y que pretende que todo aquel que vive en el campo tiene derecho automático a un pedazo de tierra. Esa demagogia le cuesta caro al país que la desarrolle.

Creemos, sí, que debe facilitarse el acceso a tierras suficientes a quienes estén en condiciones de ponerlas a producir. Lo que se ha planteado en la nueva Ley de Reforma Agraria, con el complemento de proyectos productivos viables, apunta en la dirección correcta.

Hemos hablado de un desarrollo agrario que no sólo se limita a los aspectos productivos, sino que abarca a la sociedad rural. Por ello, lo que se haga debe siempre tener en cuenta que hay que colaborar a crear y enriquecer el tejido social rural. Tejido en el cual aparecen los propietarios y productores independientes, pero también los asalariados y las actividades familiares. En esta línea de pensamiento, la política social debe reconocer que el único empleo rural no es el que está ligado a la explotación directa de la tierra, sino todo aquel que se genere en la capitalización de dicha actividad, con el consiguiente incremento en la agregación de valor en el campo. Además hay amplias y crecientes posibilidades de empleo productivo, en la prestación de servicios y en el desarrollo de microempresas rurales, con base en la exitosa experiencia urbana.

En este tema del desarrollo social sólo quiero agregar dos puntos. El primero es que no basta con aumentar los recursos presupuestales para el campo -que hay que hacer y que apoyamos con entusiasmo-. Es igualmente urgente mejorar la calidad de ese gasto, para lo cual una planeación más juiciosa y concertada del mismo, la reforma de las instituciones ya mencionada y la presencia organizada de la comunidad, son elementos fundamentales para lograr un gasto que capitalice física y socialmente a nuestros campos. El segundo es que de manera realista pero firme, debemos luchar porque se generalice el cumplimiento de las normas legales en las empresas y actividades agropecuarias.

Entendamos que no tendremos una sociedad y una agricultura modernas si no establecemos puentes sólidos entre campo y ciudad, y el más sólido de los puentes sale de la creciente conformación de cadenas agroindustriales y agroalimentarias. Mientras ello no suceda, el campo corre el peligro de sumirse en la irrelevancia, pues la producción ciudadana e industrial se integra pero con los productores extranjeros de nuestras crecientes importaciones. Sería la venezolanización de nuestro desarrollo agropecuario con consecuencias funestas para nuestro productor primario.

El concepto de seguridad alimentaria o de abastecimiento, como lo plantea la ministra, no es un

dinosaurio sobreviviente de épocas superadas, sino realidad actuante en la políticas rurales de los grandes países del mundo. Necesitamos una agricultura que se desarrolle en ese sentido y una agroindustria que entienda que, en el tiempo, la más valiosa de sus alianzas estratégicas es la que establece con su proveedor nacional. No hay verdadero desarrollo si éste no se apalanca en los recursos y los mercados nacionales. Todo lo demás va y viene; la producción importada puede complementar pero nunca sustituir a la nacional.

Paremos acá, pero antes digamos que todo lo anterior -y mucho más que se me queda en el tintero- es posible sólo si se desarrolla una voluntad y un claro compromiso de hacerlo, congregando a quienes tienen la

responsabilidad de lograrlo, aceptando los sacrificios y la constancia que ese trabajo demanda.

Mientras no le apliquemos la misma decisión a enfrentar la violencia y buscar la paz, todo lo dicho, dicho quedará. Llegó el momento en que los colombianos digamos basta de violencia, alto a los violentos, que se sepa que hay un país que no está dispuesto a convivir más con la corrupción y la violencia, y que está listo para jugársela por salir de este callejón infernal. Se necesita un gobierno que le ponga voluntad política a esa decisión ciudadana. Eso es más importante que millones y millones adicionales de presupuesto para una acción militar ante la cual los ciudadanos no sabemos bien que posición asumir, porque no la entendemos y difícilmente la podemos valorar en toda su magnitud.